

Gobierno del Maule impulsa cooperación con Finlandia en innovación y desarrollo sostenible



En dependencias del Gobierno del Maule se llevó a cabo un importante encuentro institucional que reunió a autoridades regionales, representantes académicos y actores del ecosistema productivo, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de innovación y desarrollo sostenible.

La instancia contó con la participación del Administrador Regional, Luis Verdejo; la jefa de la División de Administración y Finanzas, Francisca San Martín; el Jefe de División de Fomento e Industria, Marcelo Rojas; el jefe de Gabinete, Diego Villar; la jefa de la Unidad Jurídica, Sandra Retamal y otras autoridades, como Harri Auvinen, Gerente de Investigación y Desarrollo en Bioeconomía y Economía Circular, Savonia University of Applied Sciences; José Cuevas, de la empresa Trongkai; Rodrigo Morales, académico de la Universidad Católica del Maule e investigador clave del proyecto y Mario

Molina, Presidente del Consejo Zonal del Colegio de Ingenieros.

Este encuentro se enmarca en una alianza estratégica con Finlandia, uno de los países líderes en bioeconomía, biorrefinerías y desarrollo de biomateriales avanzados, consolidando vínculos orientados a la innovación, el desarrollo territorial y la generación de proyectos con impacto internacional.

El Administrador Regional, Luis Verdejo, señaló que «estamos profundamente comprometidos con impulsar iniciativas que proyecten nuestro territorio hacia el desarrollo sostenible y la innovación. Esta alianza con Finlandia refleja el trabajo y la visión estratégica que ha liderado nuestro gobernador, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, quien ha puesto como prioridad fortalecer la cooperación internacional y generar oportunidades concretas para nuestra región. Hoy estamos dando pasos firmes para posicionar al Maule como un referente en bioeco-

nomía, articulando el mundo público, académico y productivo en beneficio de nuestras comunidades».

El trabajo conjunto ha sido posible gracias a la articulación entre la Universidad Católica del Maule (UCM) y la empresa Trongkai, permitiendo la incorporación de enfoques innovadores en áreas clave como la valorización de lignina técnica, el desarrollo de materiales biodegradables y la integración del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en la toma de decisiones tecnológicas e industriales.

La conexión con el ecosistema finlandés ha sido fundamental para adaptar prácticas de frontera al contexto chileno, especialmente en regiones agroforestales como el Maule, fortaleciendo así su capacidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

En este contexto, se presentó el Memorando de Entendimiento (MOU) Chile-Finlandia en Bioeconomía que se posiciona

como un hito relevante. Este acuerdo es liderado por la Universidad Católica del Maule junto a la Universidad de Talca, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Concepción, en colaboración con instituciones finlandesas de alto nivel: University of Eastern Finland, Karelia University of Applied Sciences y Savonia University of Applied Sciences.

El objetivo del MOU es fortalecer la educación, la investigación y la formación profesional en bioeconomía y bioeconomía circular, mediante programas conjuntos, intercambio de mejores prácticas, formación continua y desarrollo curricular colaborativo. Entre sus áreas prioritarias destacan el uso sostenible de recursos naturales, la bioeconomía circular, los sistemas agroforestales y la construcción en madera.

Este acuerdo ha impulsado diversas actividades estratégicas en la Región del Maule, incluyendo giras tecnológicas a Finlandia, visitas de expertos internacionales —como el Dr. Harri Auvinen y el Dr. Jukka Tikkanen— y el desarrollo de proyectos conjuntos con la participación de destacados académicos, entre ellos Rosa Alzamora (Universidad de Concepción), Carmen Bravo (UCM) y Rodrigo Morales (UCM).

Esta colaboración internacional fortalece las capacidades regionales y posiciona al Maule como un referente en la transición hacia una bioeconomía sostenible, promoviendo la innovación, el desarrollo territorial y la cooperación global.



Actualidad

El dilema del MEPCO: entre la racionalidad política y la racionalidad económica

Aunque el MEPCO está diseñado como un mecanismo de estabilización, desde el punto de vista del gasto fiscal opera como un subsidio contingente: cuando amortigua el alza de los combustibles, no elimina el costo del shock externo, sino que lo traslada al Fisco. Por tanto, el debate no radica en la estabilización del precio de las bencinas, sino en cómo el Estado administra fiscalmente ese costo y distribuye sus efectos. Reducir la intensidad del MEPCO no es una respuesta puramente técnica, sino una decisión política sobre quién asume el ajuste: si el presupuesto público, mediante mayor gasto o menor recaudación, o los hogares y pymes, mediante un alza inmediata en los precios al consumidor. Ese es el dilema: si el Estado amortigua el shock, protege los ingresos y modera los efectos inflacionarios, pero tensiona las cuentas fiscales; si reduce la amortiguación, resguarda las cuentas fiscales, pero traslada el costo a los hogares, las pymes y al resto de la economía.

Desde la racionalidad política, intervenir es comprensible porque sus efectos son visibles e inmediatos: afectan al transporte, la logística, los alimentos y todo lo que implica el costo de vida. Pero desde la racionalidad económica, toda contención del precio al consumidor implica una carga fiscal. El punto central de la discusión no es que el petróleo suba en el mercado internacional, sino cómo se gestiona ese shock. El argumento del «fisco sin caja» justifica la cautela, pero no demuestra una única alternativa. El MEPCO se financia con recursos del impuesto específico: reducir su uso no solo ahorra gasto, sino que también mantiene una recaudación que —sumada al IVA que grava el precio final— representa una carga tributaria que recae directamente en los hogares. Toda vez que esa prudencia se combina con otras decisiones de política fiscal, el ajuste no desaparece: cambia de lugar. En vez de expresarse como gasto fiscal explícito, se traslada al presupuesto de las familias. A esto se suman compensaciones subsidiarias —transporte público, parafina, taxis, apoyos sectoriales— que atienden conflictos inmediatos, pero configuran una política fiscal de carácter reactivo, en la que la presión coyuntural puede predominar sobre los criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal.

Por eso, esta discusión no es solo política, sino también fiscal y, sobre todo, distributiva. Una vez descartada la retórica del «Estado quebrado», conviene recordar que el Estado no quiebra: puede enfrentar estrechez de caja, deterioro fiscal o restricciones de liquidez, pero no quiebra como una empresa o un hogar. Lo que queda, entonces, es una discusión sobre las prioridades de gasto y la capacidad del Estado para procesar shocks externos sin debilitar su función estabilizadora. Desde esa perspectiva, la racionalidad política busca hacer gobernable el presente; la racionalidad económica, en cambio, exige identificar quién financia esa gobernabilidad y bajo qué reglas se ordenan las prioridades públicas. Cuando el costo del ajuste se desplaza del gasto fiscal a los hogares, la prudencia presupuestaria puede acarrear efectos distributivos adversos, especialmente para quienes disponen de menor capacidad de adaptación.



Gustavo Varela R.
Académico
Carrera de Administración Pública
UA - Talca